

Los acontecimientos chilenos

Es difícil discutir en términos objetivos el experimento de Allende. Por un lado, porque la "vía chilena al socialismo" fue realmente una experiencia original: el intento de avanzar por la vía democrática y constitucional, en la dirección de una variedad marxista del socialismo. Por otro, porque en el transcurso de ese experimento algunas de las personas claves —particularmente el propio Allende— se dejaron guiar cada vez más por consideraciones de principios antes que por razones de expedición.

En vista de su originalidad habría sido tanto injusto como impropio juzgar el experimento chileno por sus resultados a corto término. La creciente imagen negativa presentada por la economía de la nación después del primer año auspicioso del régimen de Allende, no puede ser ni ignorada ni tomada como el principal patrón para establecer sus méritos. El mismo tipo de dificultades interfiere con una apreciación equitativa de los aspectos políticos del gobierno de Allende, particularmente de aquellos concernientes a los últimos meses y semanas, cuando la crisis política se precipitaba hacia una inevitable catástrofe. Mientras más inminente se veía el desastre, la conducta de Allende se orientaba con mayor fuerza por razones éticas antes que políticas, imponiendo tal perspectiva a los hechos y transfiriendo los temas del nivel de los resultados prácticos al plano del significado ideal.

En vista de estas circunstancias voy a intentar un breve análisis del experimento de Allende, considerando principalmente sus características como un modelo político, y su significado, como un experimento político, antes que sus aspectos episódicos y coyunturales. Uno de los inevitables inconvenientes de este enfoque es la necesidad, ya sea de presentar explicaciones introductoras extensas sobre los modelos políticos y las formas por las cuales puede ser objetivamente determinada su adaptabilidad a una sociedad dada, o remitir al lector a otros estudios sobre la materia. Si bien la anterior alternativa sería muy larga para este artículo, la última tiene la desventaja de no presentar en el texto mismo las suposiciones y explicaciones requeridas para su comprensión. No tengo manera de evitar estos inconvenientes pero, al adoptar la última de las alternativas señaladas, trataré de mejorar la inteligibilidad de mis argumentos indicando brevemente algunos de los principales puntos envueltos en referencias a otros estudios.

EL PROBLEMA DE LOS MODELOS POLÍTICOS

Nuestro tiempo, entre tantas otras cosas, es el tiempo del uso consciente y sistemático de la ciencia política como un camino para realizar o comprender procesos políticos. No obstante esto, las expectativas de una disminución en la cantidad de interferencia ideológica en la práctica y la discusión de la política no se han verificado, al menos en lo concerniente a temas realmente importantes. Las dos polarizaciones ideológicas principales de nuestro tiempo, alrededor del "mundo libre" y de los puntos de vista "comunistas" de nuestra sociedad y de la historia, continúan modelando la conducta y el razonamiento de la gente, con sus dos supuestos implícitos más importantes: 1) que cada una presenta el mejor modelo posible para toda sociedad, y 2) que tal modelo es, en principio, universalmente aplicable, en cualquier época.

Dejando de lado el caso menos claro de la aparición y evolución del liberalismo teórico, es difícilmente discutible que Marx no consideraba el modelo socialista como universalmente ajustable a toda sociedad, en todo tiempo. Cualquiera que fueran sus expectativas acerca del pronto advenimiento del socialismo, Marx consideraba tal proceso como sociohistóricamente condicionado por el desarrollo anterior de la sociedad capitalista¹. Aun Lenin, que avanzó más allá que Marx en el camino del voluntarismo, ha admitido siempre que el establecimiento del socialismo requiere algunas precondiciones, entre ellas un cierto grado de desarrollo capitalista². El marxismo, en sus orígenes, fue una crítica de las ideologías. El hecho de que el neomarxismo se haya vuelto principalmente ideológico y, más aún, la práctica actual de muchos grupos marxistas, caen fuera del área del presente análisis. Para sus propósitos es suficiente subrayar que el socialismo, para Marx, debiera haber sido necesariamente un reordenamiento (probablemente a través de un proceso revolucionario) de las relaciones de las fuerzas de la producción a un estadio más avanzado correspondiente a la última etapa del sistema capitalista.

No es tampoco el propósito de este breve trabajo el averiguar si el experimento de Allende era teóricamente compatible con los puntos de vista de Marx, hasta donde lo hubieran permitido las condiciones objetivas de Chile, o acerca de la posibilidad de avan-

¹Cf. Karl Marx, "Prefacio a la Crítica de la Economía Política".

²Por ejemplo, en Lenin, "El Estado y la Revolución", particularmente en el capítulo 5.

zar en la dirección del socialismo por caminos democráticos e institucionales en las condiciones chilenas. Lo que es relevante, para el presente análisis, es enfatizar la necesidad y la posibilidad de distinguir, para una determinada sociedad en condiciones determinadas, lo que uno podría subjetivamente considerar como un ideal político, de acuerdo a las propias preferencias ideológicas, de lo que objetivamente uno debería reconocer como un modelo político adecuado para esa sociedad en tales condiciones, en términos de un camino empíricamente implementable para optimizar su desarrollo societario.

Me he ocupado extensivamente en otras oportunidades³ de los aspectos teóricos e históricos de los modelos políticos, por lo que debo remitir a los lectores a esos trabajos para una comprensión completa de la materia. Aquí sólo puedo mencionar que los modelos políticos operacionales (que son tipos ideales en el sentido de Weber) son un conjunto de hipótesis sobre cómo una sociedad, en una fase determinada de su desarrollo y en condiciones dadas, pueden permitir el mejor uso práctico de sus potencialidades sociales, económicas, políticas y culturales, y a través de qué estrategia y bajo cuáles condiciones (si hay alguna) puede esa sociedad alcanzar tales resultados.

Esas hipótesis y estrategias, como todo esfuerzo humano, están sujetas a errores de concepción o de ejecución. Pero, como hipótesis y estrategias, es decir, como modelos políticos, no son arbitrarios sino, por el contrario, pueden ser investigados a través de métodos empíricos, al menos en forma genérica. El punto esencial acerca de los modelos políticos para una eventual promoción del desarrollo total de una determinada sociedad a través de medios políticos en condiciones dadas, atañe a la existencia de relaciones objetivas y visibles entre las condiciones y características estructurales de una sociedad y la mejor manera (si existe) por la cual las potencialidades de tal sociedad pueden en general ser optimizadas.⁴

No todas las sociedades o condiciones son adecuadas para formas de desarrollo factibles. Algunas sociedades no son viables, como un sistema autónomo, de ser conducidas con éxito a un desarrollo auto-sostenido. Otras, presentan condiciones tan difíciles que escasamente un líder querría y podría seguir el camino adecuado. Ambos casos se pueden encontrar fácilmente entre las sociedades subdesarrolladas de nuestra época⁵. De modo contrario, algunas sociedades, como ha ocurrido notablemente con Gran Bretaña y con los Estados

³Cf. Helio Jaguaribe, *Political Development*, Harper & Row, Nueva York, 1973.

⁴Cf. Helio Jaguaribe, op. cit., capítulo 14.

⁵Cf. ibíd., capítulo 17.

Unidos, han gozado de condiciones tan favorables para su desarrollo que lo han llevado a cabo casi sin esfuerzo deliberado y consciente, sólo por la interacción de sus grupos e intereses internos.

Volviendo a Chile, el punto esencial que tenemos que discutir sobre el experimento de Allende concierne a su ajuste, como un modelo político, a las realidades y condiciones de Chile. El problema puede llegar a ser inextricablemente ambiguo si no se adopta una distinción clara, desde el principio, entre los puntos de vista socialistas y los objetivos de Allende, por una parte, y las metas que se propuso alcanzar de su gobierno, por la otra. Aun si estas últimas pueden haber sido, en la teoría y en la práctica, algo vagas (y esa fue una de las críticas de sus opositores bien intencionados) la distinción es válida y siempre ha sido proclamada por los líderes de la Unidad Popular. El gobierno de Allende quería avanzar abiertamente en el camino hacia el socialismo, sin pretender establecer, en el transcurso de su período, una sociedad totalmente socialista, y sin declarar que hubiera sido posible hacerlo así. Aunque en forma menos específica de lo que hubieran querido algunos críticos de la oposición, el programa de la Unidad Popular había definido las principales metas y políticas del nuevo gobierno. Es en función de tal programa como debe ser evaluada la idoneidad del modelo político de Allende.

ESTRUCTURA Y CONDICIONES CHILENAS

Nuevamente no es compatible con los límites de este breve artículo presentar incluso una descripción sumaria de los principales rasgos y condiciones de Chile, tal como se apreciaban al final de la administración de Frei. Debe ser suficiente indicar algunos de los aspectos cruciales que presentaba esa sociedad por aquel entonces.

Chile era un país con menos de diez millones de habitantes, que ocupaba la parte central de su largo y angosto territorio de 756.945 kilómetros cuadrados. Esa población era predominantemente urbana, con una clase campesina de sólo alrededor del 30 %. El producto bruto *per capita* de Chile era entonces de alrededor de 700 dólares. Tratábase de una población bien educada (con un 80 % de alfabetismo), con un sector medio competente y profesionales técnicamente calificados de óptimo nivel.⁶

En términos de estratificación socioeconómica, Chile era predominantemente una sociedad de clase media. Menos, en términos latinoamericanos, que Argentina, pero claramente más que Brasil

⁶Cf. Helio Jaguaribe, op. cit., Tabla 36 (pp. 396-397).

o México. Estimaciones de CEPAL, Aníbal Pinto y otros investigadores⁷, aceptan como una base razonable que la clase alta, incluyendo a los dueños de importantes medios de producción, urbanos y rurales, representaría un 5 % de la población. A ese grupo debe añadirse el estrato superior de la clase media, que debía representar alrededor de un 10 % de la población, incluyendo a los gerentes de las empresas más importantes y a los profesionales mejor situados. El sector intermedio de la clase media, incluyendo a la mayoría de los profesionales, técnicos y ejecutivos medios, representaría un 15 % de la población. Otra capa, de alrededor del 20 % de la población, corresponde a la baja clase media, incluyendo muchos empleados, gente en actividades de *autoempleo* y técnicos de bajo nivel. La clase baja, incluyendo a un campesinado representativo de alrededor de un 30 % de la población, tendría su parte urbana dividida entre trabajadores más o menos organizados y un gran sector de un proletariado marginal, viviendo en condiciones de subempleo, a un nivel de subsistencia.

Esta gente estuvo expuesta, durante la administración de Frei, a una situación política compleja. Los ambiciosos planes de Frei—revolución en libertad, desarrollo económico y redistribución social, refuerzo del control nacional sobre la economía y su expansión simultánea—había obtenido resultados variados. En términos objetivos, las metas de Frei se habían cumplido, en general, razonablemente bien⁸. Más efectivamente en el área política (libertad, autonomía internacional, nacionalismo económico), suficientemente bien en el área económica (desarrollo total: 25,6 % de aumento del PNB en seis años, representando un aumento lineal *per capita* del 2,3 %) y menos en el área social (reforma agraria, destinada a 100.000 familias, por demoras en la ley alcanzó sólo a 30.000 familias). La imagen del gobierno de Frei, sin embargo, dio pruebas de ser más pobre, al final de su término, que lo que los hechos deberían haber autorizado. Como frecuentemente sucede con los reformadores moderados, particularmente cuando sus logros no pueden ser comparados con los de políticas alternativas en períodos recientes, Frei fue acusado por los sectores conservadores de supuestas interferencias en sus reformas sociales.

La administración de Frei había reforzado entre los chilenos su sentido de confianza en el estado nacional y sus expectativas concernientes a sus propios intereses sectoriales y de grupo, percibidos como decisivamente condicionados por opciones políticas. Pero la

⁷Cf. CEPAL: *Latin America and the International Strategy for Development*, E/CN 12/947, junio 1973. Ver también Aníbal Pinto, *Tres Ensayos sobre Chile*, p. 133 y sigs., Ediciones Solar, Buenos Aires, 1971.

⁸Cf. Helio Jaguaribe, *op. cit.*, p. 500 y sigs.

división de tendencias resultante, como se vio en las elecciones del 4 de setiembre de 1970, fracasó en asegurar una mayoría sólida. Los tres candidatos: Jorge Alessandri, por el Partido Nacional, representante de los conservadores; Radomiro Tomic, por los demócratas cristianos, representante de la izquierda moderada, y Salvador Allende, por la Unidad Popular, representante de la izquierda radical, obtuvieron, respectivamente, 34,9 %, 27,8 % y 36,3 % de los votos.

Políticamente como afirmaron algunos las elecciones pudieron significar un claro mandato (64,1 %) de cambio social. También pudo expresar una clara manifestación de reserva (62,7 %) contra el socialismo extremo: Sería más fructífero, sin embargo, interpretar el resultado electoral como el reflejo de una situación política compleja, en la que se manifestaban dos tendencias principales. Positivamente, mucha gente quería una continuación (en términos más o menos moderados o radicales) de las políticas de reforma social iniciadas por el gobierno de Frei. Negativamente, mucha gente rehusó un modelo radicalmente socialista (marxista).

Esas dos tendencias, dadas las condiciones chilenas de la época, eran también consistentes con la estratificación social anteriormente indicada. El núcleo de los votos antirreforma para Alessandri era el sector capitalista y gerencial, reforzados por un considerable contingente de grupos de clase media y sectores rurales acomodados. El núcleo del socialismo marxista de Allende estaba formado por los trabajadores sindicados, reforzados por los campesinos sin tierra y por parte del *lumpen* urbano. El núcleo de los reformistas moderados de Tomic era la clase media progresista, los trabajadores independientes y los sectores campesinos favorecidos o a la espera de ser favorecidos por la reforma agraria de Frei.

EL PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR

Como anteriormente se hizo notar, Allende y la Unidad Popular siempre marcaron la distinción entre sus propias preferencias por un modelo verdaderamente socialista y su programa de gobierno, que sólo pretendía iniciar la "vía chilena al socialismo". Ese programa, ampliamente difundido en todo el país a través de pequeños folletos⁹, presentaba tres áreas principales: política, económica y social.

La reivindicación política más importante era la construcción del

⁹Cf. Programa de Gobierno de la Unidad Popular, aprobado el 17 de diciembre de 1969.

“Estado Popular”, que comprendía una profundización de la democracia, con un fuerte aumento de su contenido social. El principal instrumento institucional propuesto para tal fin era una Asamblea del Pueblo unicameral, que debería ser aprobada, a través de una reforma constitucional, por el Congreso Nacional y tomar su lugar y funciones con poderes más amplios.

La reivindicación económica más importante era el desarrollo de una economía nacional, compuesta por tres áreas principales: el área social, en la forma de empresas del estado; el área privada, manteniendo sus características presentes con un constante aumento de los derechos de los trabajadores, y el área mixta, abierta a inversiones conjuntas del estado y grupos privados. La idea central, concerniente al “área social”, era transferir al estado el control de los siguientes sectores o actividades estratégicas: 1) los recursos naturales básicos: cobre, hierro, salitre; 2) el sistema financiero: bancos y compañías de seguro; 3) el comercio exterior; 4) los grandes intereses y aquellos que detentaban el monopolio de la distribución; 5) los monopolios industriales estratégicos; 6) las actividades condicionadoras del total de la economía, tales como energía eléctrica, ferrocarriles, navegación aérea y marítima, comunicaciones, petróleo, acero, cemento, petroquímica e industria química pesada, celulosa y papel.

De acuerdo con la visión de Allende y de la Unidad Popular, la transferencia al “área social” de aquellas actividades estratégicas aseguraría el control de la economía del país y la conduciría por la “vía chilena al socialismo” sin, por otra parte, afectar la vida normal de la mayoría de la gente, con la excepción de algunos pocos grupos capitalistas. De acuerdo con las estimaciones de la Unidad Popular, de las 30.500 industrias chilenas registradas por el censo de 1967, sólo alrededor de 150 empresas habrían de ser incluidas en la lista de expropiaciones.¹⁰

La reivindicación social más importante del programa de la Unidad Popular fue la aceleración y profundización de la reforma agraria. La reforma agraria de Frei, si bien por razones ajenas a su voluntad, vinculadas a la proposición por parte del Congreso de la ley respectiva, quedó muy lejos de sus metas. El programa de la Unidad Popular prometió proceder rápidamente a la distribución total de las tierras a todos los campesinos sin tierra. Más aún, planeaba revisar el sistema de “asentamientos” y cambiarlo (siguiendo el modelo cubano) por cooperativas, más adecuadas para un total aprovechamiento de las posibilidades de mecanización y otras ventajas derivadas de las economías de escala.

¹⁰Cf. Gustavo Canihuante, *La Revolución Chilena*, p: 65 y sigs., Editorial Nascimento, Santiago, 1971.

¿Hasta qué punto el programa básico del gobierno de Allende, brevemente resumido en las líneas precedentes, era compatible con las características estructurales y condiciones chilenas, que han sido ya indicadas? Uno de los aspectos más interesantes de esta interrogante es el hecho de que, si bien el programa de la Unidad Popular era prácticamente idéntico al de Radomiro Tomic¹¹ —como éste siempre lo subrayó— la distinción entre sus respectivas posiciones (la imagen que ellos representaban) y sus correspondientes significados políticos (el programa que efectivamente querían realizar) era sin embargo considerable. Tomic se preocupaba poco por la diferencia de ambas posiciones, pero mucho, y cada vez más durante el transcurso del gobierno de Allende, por la diferencia de significados¹². Allende, por el contrario, daba más importancia a lo primero.

Esencialmente, la diferencia de significados, como enfatizaba Tomic, consistía en el hecho de que una gran parte de la socialización de los medios de producción para él y para los cristianos de izquierda, no eran un fin en sí mismos sino sólo una condición y un instrumento para construir una sociedad más justa, fundada en un sistema efectivo de solidaridad social. Por eso, para Tomic, las diferencias de posición eran irrelevantes. Su principal crítica a Allende y la Unidad Popular consistía en que éstos se encontraban mucho más preocupados de construir una imagen y acumular poder que con la instauración de una sociedad justa, hasta el punto de que estaban realmente arruinando las posibilidades de tal propósito al adoptar políticas y medios que eran cada vez más divisionistas y generadores del odio social. Para Allende, por el contrario, las diferencias de posición eran bastante importantes, tanto que siempre rehusó las frecuentemente renovadas proposiciones de colaboración de los cristianos de izquierda, aun en sus peores crisis. El prefirió subrayar las diferencias de imagen entre su gobierno socialista —moderado en estilo y métodos pero comprometido con el socialismo marxista— y un grupo de cristianos reformistas bien intencionados—cuyas pulcras políticas de corto plazo contribuirían, sin embargo, en último término, al fortalecimiento del capitalismo.

Estas concepciones y puntos de vista contrapuestos no se debían a claras diferencias de personalidad y a razones circunstanciales que estaban directamente conectadas con el enigma central que estamos tratando de dilucidar. En cuanto a lo concerniente al área de expectativas comunes, el programa de la Unidad Popular, como

¹¹Cf. el discurso de Tomic: "La revolución chilena y la Unidad Popular", ante el Comité Nacional del Partido Demócrata Cristiano en marzo de 1969.

¹²Cf. Radomiro Tomic: "El camino chileno al socialismo", un estudio para el Plenario del Consejo Nacional de su partido, en marzo de 1972.

un conjunto dado de políticas y medidas propuestas, se ajustaba objetivamente a las posiciones de una gran mayoría de chilenos, que correspondía aproximadamente a las fuerzas de Allende y Tomic reunidas. Sin embargo, hasta donde las medidas y las políticas propuestas eran vistas como medios para cumplir ciertos fines, ese consenso se rompería, de acuerdo a si la destrucción del sistema capitalista y su sustitución por una variedad marxista del socialismo era el objetivo buscado, o si la meta era reducir las tensiones sociales y el odio de clases a través de un compromiso social, incli- nándose a un estado benefactor cada vez más.

De ahí que el programa de la Unidad Popular, mientras estadísticamente estaba de acuerdo con las condiciones y deseos de una mayoría de dos tercios de la población, tal como iba a ser llevado a cabo pudo llegar a ser fuertemente resistido por una mayoría equivalente.

La conducta de las fuerzas políticas en el período comprendido entre la elección y la confirmación congresional de Allende, así como también en el curso de su primer año de gobierno, tendió a confirmar tal supuesto. Los demócratas cristianos, particularmente el ala izquierda, aceptaron la confirmación de Allende a cambio de garantías adicionales, dadas por él, de respeto a las instituciones democráticas, lo que debía entenderse no sólo como el compromiso de preservar literalmente la democracia política, sino también como una renuncia formal de Allende y la Unidad Popular al propósito de establecer una sociedad verdaderamente socialista. Y cuando, a fines de 1971, la cantidad de medidas socializantes y particularmente la forma en que estaban siendo implementadas, excedieron la tolerancia de los sectores reformistas moderados, su reacción no fue ni insurreccional ni siquiera de oposición condicional. Ellos sólo querían una reforma de la Constitución por la vía parlamentaria (22 de diciembre de 1971), para someter el Ejecutivo a regulaciones legales y controles del Congreso en sus procedimientos de expropiación.

¿REFORMA O REVOLUCIÓN?

La práctica del régimen de Allende presenta aproximadamente tres fases distintas. La primera, desde la asunción al mando el 4 de noviembre de 1970 hasta fines de 1971, corresponde al período de rápida formulación de las nuevas políticas, abarcando, deliberadamente o no, un traspaso sustancial de intereses y actividades del área privada al área social. La segunda fase, a través de las elecciones de marzo de 1973, corresponde a un período de intensa lu-

cha, con la oposición tratando de detener la siempre creciente tendencia a una total socialización y el gobierno tratando de aventajar a la oposición y de intensificar tal tendencia. En esta fase la lucha todavía se libra fundamentalmente a través de cauces institucionales, a pesar de que ambos bandos movilizan tantas presiones de masas como pueden y se aprovechan —aunque sin tomar la iniciativa— de actos de violencia efectuados por extremistas de su propio campo y tratan desesperadamente de conseguir el apoyo militar respectivamente. La tercera y última fase corresponde al resto de 1973, hasta el derribamiento de Allende por los militares el 11 de setiembre, y es un período en que cada uno de los lados llega a la conclusión de que no serán capaces de conseguir una victoria política a través del uso de vías institucionales, ni aun en el más estricto sentido de imponer la relativa neutralización de sus respectivos oponentes.

Es el camino que tomó Allende, en la tercera fase de su gobierno, lo que llevó el drama chileno a convertirse en tragedia. Pero es la manera en que éste reaccionó frente a los hechos y condujo a ciertos resultados en la primera de sus fases, lo que explica que la “vía chilena al socialismo” terminara en un punto muerto y el experimento de Allende estuviera destinado a la ruina o a un cambio radical de fines y métodos.

El complejo conjunto de políticas, medidas, imágenes y eventos sobrepuestos en la primera fase del gobierno de Allende puede ser, quizá, reducido a dos dimensiones principales. La primera concierne a la capacidad general de la administración de Allende para hacer, implementar y controlar decisiones. La segunda concierne a la forma en la cual Allende, confrontado con la emergencia y expansión de las violaciones a sus reglas básicas provenientes de su propio campo, manejó tales hechos.

En un sentido más amplio, era la inhabilidad del gobierno de Allende para ser razonablemente efectivo en la formulación, ejecución y supervisión de sus políticas y medidas, lo que, finalmente, lo llevó al fracaso. La discusión de tal asunto, si bien esencial para una apreciación objetiva del experimento de Allende, es ajena a los propósitos del presente artículo, como ha sido anteriormente adelantado. Cualesquiera que fueren los factores, desde la propia personalidad de Allende hasta las peculiares condiciones de su situación política, que contribuyeron a producir tal resultado, el hecho es que, desde un punto de vista objetivo, su gobierno fue más bien ineficaz. Uno de los más usuales aspectos de tal inefectividad consistió en la falta de coherencia y disciplina interna, no sólo horizontalmente, entre diferentes órganos de la administración, sino también verticalmente, en cada uno de ellos. Y esto, entre otras razones, por causa de la manera como habían sido distribuidas las

funciones públicas entre los miembros y amigos de la coalición del gobierno. Así, por ejemplo, un ministro socialista tenía subsecretarios comunistas y jefes de servicio del MAPU, en los cuales él no confiaba, en tanto que sí lo hacía en empleados de otros sectores de su ministerio, ya sea de su propio partido y de su confianza personal, pero que no podían ser investidos con las funciones administrativas requeridas para llevar a cabo tareas que el ministro hubiera necesitado encomendarles.

Dadas las condiciones y plasticidad de Chile, sin embargo, la ineffectividad del gobierno de Allende pudo no haber necesariamente terminado en desastre, si no hubiera sido por la segunda dimensión precedentemente indicada. Como Perón al retomar el poder, Allende se enfrentó, desde el principio de su gobierno, con un ala izquierda exigente e inquieta. Pero, al contrario de Perón, que parcialmente por el ejemplo de Allende decidió frenar a sus propios extremistas, Allende siempre rehusó hacerlo. Sus extremistas eran, en parte, miembros de su propio partido socialista, siguiendo el liderazgo del amigo y competidor de Allende, Carlos Altamirano. En parte, estaban integrados por los extremistas marginados del sistema, pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), convencidos de que sólo la violencia podía lograr la deseada revolución. Y en parte, ellos eran los revolucionarios o activistas sociales oportunistas trabajando al margen de los movimientos laborales, rurales y urbanos, fuera de cualquier partido o disciplina de sindicato.

Esta gente, actuando por iniciativa propia, en un número de pequeños grupos no coordinados, pero produciendo un resultado acumulativo común, procedieron a las tomas de fundos y fábricas, prescindiendo de las políticas y normas del gobierno. Un número creciente de empresas que, de acuerdo al programa de la Unidad Popular y a las políticas vigentes del primer ministro de Economía de Allende, Pedro Vuskovic, no estaban supuestas de ser transferidas al área social, fueron ocupadas por sus propios trabajadores y arrebatadas a sus legítimos dueños. Confrontado con tales tomas, Allende decidió, desde el comienzo, no usar jamás la fuerza para expulsar a los ocupantes. Trató, inicialmente, de persuadir a los trabajadores de terminar con tales iniciativas, explicándoles por qué determinadas empresas no estaban incluidas en el plan de expropiaciones y debían permanecer bajo una dirección privada. Como estos esfuerzos de persuasión resultaron inútiles, el gobierno de Allende, antes de usar métodos represivos, prefirió aceptar tales tomas como un peso adicional pero inevitable en la transición de Chile hacia el socialismo.

El problema, por supuesto, producido por el hecho de que las tomas no autorizadas eran practicadas cada vez más y sin control

público, fue el que motivó el fin de la credibilidad en la división de áreas propuesta por el gobierno de la Unidad Popular. Para fines de 1971, se vio claro en Chile que, de acuerdo o no, la administración de Allende era totalmente incapaz de preservar el sector privado y que, oficialmente o no, los dueños de todos los medios de la producción serían totalmente desplazados.

El proceso de tomas, cuyos efectos estaban multiplicados por la convicción generalizada de que todos los medios de producción serían finalmente expropiados, sea legalmente o por medio de nuevas tomas, trajo consigo, cualesquiera que fueran las intenciones del gobierno, un cambio radical en su significado político. El programa de la Unidad Popular, por lo tanto, comenzó a ser visto como un claro encubrimiento para un proceso revolucionario, que realmente conducía a la subversión total del régimen socioeconómico anterior, aun en el caso de que sus instituciones políticas fueran básicamente preservadas. Y desde entonces, la anterior mayoría partidaria de las reformas —cuyas aspiraciones pudieron haber sido aceptablemente expresadas por los propósitos del programa de la Unidad Popular al principio del gobierno de Allende— se transformó en una gran mayoría militante contra el socialismo radicalizado.

El cuadro de la economía chilena entró desde fines de 1971 en adelante en una decadencia cada vez mayor, agravada por huelgas y problemas de distribución. La producción agrícola bajó, forzando una creciente importación de alimentos (de \$ 136 millones, en 1970, a alrededor de \$ 400 millones en 1972) mientras los precios subieron dramáticamente, llegando a fines de 1970 a un aumento anual del 150 % que todavía había de ser duplicado al año siguiente.¹³

LA LUCHA INSTITUCIONAL

La primera fase del gobierno de Allende, desde noviembre de 1970 hasta el fin de 1971, fue un período de remarcable éxito por el avance de las reformas de la Unidad Popular. Aun en términos económicos, a pesar de los muchos y serios problemas que visiblemente estaban comenzando a surgir, tal período llevó a un rápido elevamiento del PNB (8 % contra 2,8 % en 1970) en vista de la gran expansión de la demanda interna proporcionada por las medidas redistributivas (aumento de un 30 % del salario real) del gobierno¹⁴. El gobierno, más aún, fue entonces capaz de mantener los

¹³Cf. *Current History*, february 1973: Alan Angell, "Problems in Allende's Chile", pp. 57-60.

¹⁴Cf. Alan Angell, *Allende's First Year in Chile*, pp. 76-80.

precios bajos, limitando el margen de ganancia de tal manera que el ritmo de la inflación declinó (14 % contra un 23 % el año anterior) ¹⁵. En cambio, como fue subrayado anteriormente, el hecho de que la administración fuera incapaz de imponer sus reglas básicas en su propio campo destruyó la credibilidad del programa de la Unidad Popular y trajo la pérdida de ese mínimo consenso implícito que había conseguido reunir inicialmente Allende.

La crisis sociopolítica generada a fines de 1971 por las tomas y otras formas irregulares de transferencia de propiedad al área social no creó, sin embargo, ningún daño inmediato serio para el régimen. Con la excepción de la extrema derecha, la oposición estaba inclinada a preservar y a consolidar las instituciones. Los moderados de los dos campos —los cristianos de izquierda en la oposición, los comunistas en la Unidad Popular— estaban buscando un compromiso nacional. El gobierno consolidaría sus importantes logros, el *status quo* resultante sería aceptado como irreversible, pero la ley otra vez sería impuesta estrictamente y nuevas reglas (a través de una reforma constitucional) someterían las facultades para expropiar del ejecutivo a un control legal y congregacional mucho más estrecho.

La solución de compromiso, sin embargo, no prevaleció. Otra vez, no es el propósito de este artículo analizar el complejo flujo de la coyuntura chilena, en el transcurso de la administración de Allende. Permítaseme recordar que en esa ocasión, como en otras crisis que enfrentó su gobierno, la conducta de Allende siempre fue guiada por un doble propósito: mantenerse fiel a su compromiso socialista y cumplir con la voluntad de la mayoría, en los debates internos de la coalición de la Unidad Popular.

La incapacidad para alcanzar un compromiso, hacia fines de 1972, llevó a la administración de Allende a una segunda fase, caracterizada, como se dijo anteriormente, por una amarga lucha político-institucional con la oposición, si bien básicamente dentro de los límites del sistema constitucional. Como el ejecutivo y el congreso, este último apoyado por el poder judicial, fueron gradualmente forzados a reconocer su incapacidad mutua para someterse unos a otros —en vista de que las condiciones socioeconómicas se estaban deteriorando a un ritmo alarmante, particularmente después de la primera huelga de los dueños y choferes de camiones—, ambos lados llegaron a una especie de tregua, en la cual jefes militares que aceptaron cargos ministeriales actuaron como intermediarios. La lucha política se transfirió entonces al arbitraje de las elecciones de marzo de 1973, para la renovación de la Cámara y un tercio del Senado.

¹⁵*Ibidem.*

Las elecciones de 1973, sin embargo, resultaron indecisas. La coalición de la Unidad Popular, contra las previsiones de la oposición, ganaron el 43,9 % de los votos, mejorando su posición relativa en el Congreso —a pesar de los problemas socioeconómicos existentes—¹⁶ aumentando el margen de apoyo inicial a Allende, oportunidad en que éste sólo obtuvo el 36,3 % de los votos. Sin embargo, el gobierno no fue capaz de alcanzar una mayoría parlamentaria para endosar su proyecto socialista ni la oposición pudo obtener el *quorum* necesario para acusar constitucionalmente al presidente o forzarlo a detenerse o a echar marcha atrás en sus políticas.

Para los analistas de la situación chilena después del punto muerto en que la dejaron las elecciones de 1973, resultaba claro que sólo quedaba un número limitado de soluciones posibles. Una primera alternativa, nuevamente, podría haber sido una transacción: la aceptación de la irreversibilidad del nuevo *status quo* (ya entonces esencialmente afectado por nuevas tomas) junto con la promulgación de la reforma constitucional (siempre pendiente de la sanción del Ejecutivo) y su estricta observancia. Una segunda alternativa podía haber sido una toma de posesión legal de la totalidad del poder por parte de la Unidad Popular. Suponiendo que hubieran querido y hubieran sido capaces de organizar con éxito una especie de nuevo “golpe de Praga”. Una tercera alternativa contrapuesta habría sido un golpe exitoso de la extrema derecha (Patria y Libertad) con o sin apoyo militar significativo. Una cuarta alternativa era un golpe militar puro, dependiendo de que los militares pudieran alcanzar la unidad y la decisión requerida para una acción conjunta. Finalmente, una quinta posibilidad, que era la más temida por muchos chilenos, era una especie de guerra civil española, en el caso bastante posible de que ningún sector consiguiera suficientes fuerzas para tomar el control total de la situación.

Una de las características más extraordinarias de la situación chilena, desde las elecciones de marzo de 1973 hasta la caída de Allende, el 11 de setiembre de ese año, es el hecho de que las partes contendientes no habían sido capaces ni de alcanzar un compromiso ni de embarcarse en la preparación de un golpe, al menos en lo que a Allende se refiere, en el campo del gobierno, y a los cristianos de izquierda y al Partido Demócrata Cristiano, como un todo, en el campo de la oposición. Ambos lados, sin embargo, reconociendo que la situación era insostenible y que sus propias alas radicalizadas estaban aumentando rápidamente, estaban comprometidos en una creciente carrera para armarse y estaban marchando así inevitablemente hacia algún tipo de confrontación violenta.

¹⁶Justificando el apoyo del gobierno a pesar de la crisis económica, los trabajadores inventaron el slogan: “éste será un gobierno de mierda, pero es el nuestro”.

EL RESULTADO TRÁGICO

Desde fines de junio de 1973 se hizo claro que el desenlace no se haría esperar. La abortiva rebelión del 28 de junio era signo visible de que la proclamada posición de neutralidad y no interferencia política de los militares chilenos había sido erosionada por la gravedad de la crisis nacional. La segunda huelga de camioneros, comenzada el 25 de julio, y la intratabilidad desde entonces demostrada por ellos fue otra señal de que la situación presente era insostenible.

Una última y decisiva indicación de la imposibilidad, para Allende, de mantener su autoridad sin algún nuevo y radical cambio de políticas, se vio cuando los jefes militares, que nuevamente habían sido llamados en forma provisional a responsabilidades ministeriales, comenzaron a renunciar. Primeramente, el 18 de agosto, vino la renuncia del general de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danyau, que juntamente con ser comandante en jefe del arma tenía la cartera de Obras Públicas. Esta renuncia fue también la confirmación de los rumores de que la Fuerza Aérea era, entre los servicios militares, el más hostil al régimen de Allende. Luego, el 23 de agosto, el general Carlos Prats, ministro de Defensa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y campeón principal de la legalidad constitucional, también renunció, manifiestamente para no dar pretextos a aquellos que querían derribar al presidente, pero es reconocido que fue en acatamiento de deliberaciones del Alto Comando del Ejército. Al día siguiente, el almirante Raúl Montero, comandante el jefe de la Armada y ministro de Hacienda, también presentó su renuncia.

El fin del apoyo público de los jefes militares, cualesquiera hubieran sido las posibilidades que hasta entonces había tenido Allende, redujo aún más dramáticamente sus alternativas. Si hubiera querido preparar un golpe "tipo Praga" —que él nunca consideró— ése hubiera sido el momento de hacerlo. De otra manera, su alternativa restante hubiera sido negociar un compromiso con la oposición. Tomic y los cristianos de izquierda, que siempre habían estado conscientes de los riesgos de una guerra civil o de un golpe militar, y deseosos de prevenir ambos, para salvar las instituciones y, en lo posible, las reformas sociales, presionaron a su partido para ofrecer a Allende los mejores términos posibles. La propuesta del partido fue: 1) promulgación de la reforma constitucional; 2) aceptación del *statu quo* con estricta observancia de la ley; 3) desarme general de todas las facciones, bajo la supervisión de las Fuerzas

Armadas, y 4) dirección competente de las empresas transferidas al área social.

Mientras la crisis se estaba formando, sin embargo, Allende se volvió cada vez más escéptico respecto de las posibilidades de un arreglo por medios políticos y más decidido a confrontar los problemas en términos de principios más bien que de la eficacia. Como muchos socialistas, él siempre había sido perseguido por el feo espectro de la traición de González Videla a la izquierda, en 1948. El nunca traicionaría sus principios socialistas. Ni se comprometería ni intentaría un movimiento ilegal. Se aferraría a sus puntos de vista, sus responsabilidades y su autoridad presidencial. Habría que dejar a otros tomar la iniciativa y la responsabilidad de violar la Constitución. El lucharía solo en su defensa. Moriría durante el ataque de los militares al palacio presidencial.

Las decisiones éticas y las decisiones políticas están sometidas finalmente a diferentes criterios. Pueden a menudo coincidir, en sucesos actuales. Rara vez lo hacen en momentos de seria crisis. La política, como es bien conocido, es el arte de lo posible. La persuasión (por ejemplo, cambiar la conducta de otros) y el compromiso (por ejemplo, cambiar la propia conducta) son las principales polarizaciones entre las cuales se desarrolla el juego político. Las decisiones éticas consisten, en condiciones dadas, en optar por una norma de conducta a pesar de sus consecuencias no deseadas.

Confrontado con la más grave crisis de su régimen, Allende eligió reaccionar en términos éticos antes que políticos. En vez de elaborar un compromiso o —dependiendo de arreglos previos— un golpe exitoso, se decidió por un desenlace trágico. Haciendo esto, él estaba perdiendo el juego a corto plazo, necesaria y deliberadamente. Otra gente y otras fuerzas tomarían el control del gobierno. El moriría. Pero mientras la transición de un regateo político, practicable a la irreversibilidad de una trágica decisión ética trae consigo la pérdida del control de los eventos inmediatos, puede a veces —no necesariamente— llevar a la construcción de un ejemplo preciso, pleno de un significado duradero, que va a reoperar en la historia y formas de conducta de otros hombres en la determinación de sucesos futuros.

El fracaso del experimento de Allende, reducido a sus términos políticos puros, puede haber sido otro de los tantos intentos fracasados de construir una sociedad socialista, tal como la República Socialista de Marmaduque Grove, de corta vida, en el Chile de los treinta. Su trágica decisión de morir por sus principios es posible que ejerza decisiva influencia en el futuro y de hecho ya ha conferido la más alta respetabilidad a la tentativa de Allende y a su imagen.

En cuanto a lo que debe hacerse para rehacer la situación socio-económica de la nación, cualesquiera que sean las condiciones pre-
valecientes actualmente en Chile y cualesquiera los puntos de
vista anteriores de los militares actualmente en el poder, uno no
puede dejar de ver en su conducta los lamentables reflejos de
los complejos de inferioridad y culpa impartidos por la decisión
de Allende.